

JF010052381504

JF010052381504

**JUICIOS EN ESTADO DE SENTENCIA Y SENTENCIADOS
SE DICTA SENTENCIA DEFINITIVA**

Monterrey, Nuevo León, a 3 tres de abril del año 2025 dos mil veinticinco.

V i s t o: Para resolver en definitiva los autos del expediente judicial *****, formado con motivo del **juicio ordinario civil sobre pérdida de la patria potestad**, promovido por *****, en contra de *****, respecto del menor *****. **Vistos:** El escrito inicial de demanda, el emplazamiento realizado, las pruebas ofrecidas y desahogadas, cuanto más consta dentro del sumario, convino, debió verse, y;

R e s u l t a n d o:

Primero: Que por escrito presentado ante la Oficialía de Partes de los Juzgados Familiares del Primer Distrito Judicial en el Estado, el día 2 dos de mayo del año 2023 dos mil veintitrés, compareció la señora *****, promoviendo por sus propios derechos **juicio ordinario civil sobre pérdida de la patria potestad**, respecto del menor *****, en contra de *****, de quien reclama los conceptos que refiere en su escrito inicial de demanda, exponiendo como hechos base de su acción los que refiere en el mismo.

(NOTA: Se tiene por reproducido en forma literal en este fallo el texto conducente establecido en el escrito de referencia, para los efectos legales a que hubiere lugar.)

Invocó las disposiciones legales que estimó aplicables a su demanda, solicitando que en su oportunidad se dictara sentencia favorable a sus pretensiones.

Segundo: Después de haber dado cumplimiento a unas prevenciones realizadas, se admitió a trámite la demanda planteada, ordenándose el emplazamiento respectivo a la parte reo a fin de que dentro del término de 9 nueve días ocurriera a producir su contestación y a oponer las excepciones y defensas de su intención si las tuviere; asimismo, se designó como tutor del menor inmerso en la causa, al licenciado *****, quien posteriormente aceptó el cargo conferido en su persona y protesto su fiel y legal desempeño en el mismo.

Luego, el demandado fue emplazado el 20 veinte de noviembre del año 2023 dos mil veintitrés, por conducto del Actuario adscrito a la Unidad de Medios de Comunicación del Poder Judicial en el Estado; sin embargo, transcurrido el término concedido al demandado para que formulara su contestación y opusiera sus excepciones y defensas, sin haber hecho uso de ese derecho, por auto del día 14 catorce de diciembre del año 2023 dos mil veintitrés, se le tuvo contestando en sentido negativo a la demanda instaurada en su contra.

Tercero: Habiendo quedado debidamente fijada la litis correspondiente, se calificaron las pruebas presentadas por las

partes, admitiéndose a trámite las que a juicio de esta autoridad se consideraron procedentes, señalándose como fecha para efecto de llevarse a cabo la audiencia de pruebas y alegatos respectiva, el día 31 treinta y uno de enero del año 2024 dos mil veinticuatro, por lo que llegada la fecha, se procedió al desahogo de las pruebas ofrecidas que requerían la intervención material por parte de este Juzgado, en los términos advertidos de la diligencia de mérito; y, al encontrarse pendiente de materializar una prueba superviniente ofertada por la parte actora, dicha audiencia fue diferida, señalándose fecha y hora para la reanudación de la audiencia de juicio, la cual fue desahogada el 8 ocho de abril del año 2024 dos mil veinticuatro, y, al no haber más probanzas por desahogar, se declaró cerrada la etapa de desahogo de pruebas, y se apertura la etapa de alegatos, haciéndose constar, que ninguna de las partes hizo uso de ese derecho.

Posteriormente, se ordenó girar oficio al Centro Estatal de Convivencia Familiar del Estado, a fin de que dicha institución efectuara una evaluación virtual al menor afecto a esta causa, para poder estar en posibilidades de conocer el grado de madurez del aludido menor y así saber si esta Autoridad podía escuchar la opinión de este.

Consecuentemente, en virtud de que la licenciada *****, Psicóloga adscrita al Centro Estatal de Convivencia Familiar en el Estado de Nuevo León, refirió que el menor *****, contaba con la madurez suficiente para establecer un dialogo con ésta autoridad y participar en Audiencia virtual, asistida por personal del referido Centro, se fijaron las 11:30 once horas con treinta minutos del día 7 siete de junio del año 2024 dos mil veinticuatro, para que, por medio de videoconferencia, el menor inmerso en la causa fuera escuchado, la cual se desahogó en la forma y términos que se indican en la certificación respectiva.

Consecutivamente, se recabó la opinión del Fiscal adscrito a este Juzgado, así como del tutor designado en autos, ello en favor del menor inmerso en la causa.

Cuarto: Finalmente, al encontrarse agotadas las etapas del presente procedimiento, se decretó ordenar dictar la sentencia definitiva correspondiente, misma que ha llegado el momento de pronunciar con apego a derecho y;

C O N S I D E R A N D O:

Primero: Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 19 del Código Civil, así como en los numerales 400, 402 y 403 del Código de Procedimientos Civiles, ambos ordenamientos vigentes en el Estado, los cuales establecen textualmente lo siguiente: "Las controversias judiciales del orden civil deben resolverse conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica. A falta de ley se resolverán conforme a los principios generales de derecho". "Sentencia definitiva es la que decide el negocio principal, e

JF010052381504

JF010052381504

**JUICIOS EN ESTADO DE SENTENCIA Y SENTENCIADOS
SE DICTA SENTENCIA DEFINITIVA**

interlocutoria, la que decide sobre una cuestión secundaria tratada en forma de incidente." "Las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas, contestaciones, réplicas y duplicas, así como en su caso, con la reconvencción, contestación, réplica y dúplica, y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, condenando o absolviendo al demandado, y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. Cuando éstos hubieren sido varios, se hará el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos." Y "La sentencia se ocupará exclusivamente de las acciones deducidas y de las excepciones opuestas respectivamente, en la demanda y en la contestación, así como de lo argumentado en la réplica de ésta última y en la duplica, y en su caso en la reconvencción, en la contestación, en la réplica y en la duplica."

Segundo: Que la competencia de este juzgado para conocer del presente negocio se surte en atención a lo dispuesto en los artículos 98, 99, 100, 111 fracción XV y 953 del Código Procesal Civil en vigor; en relación con el diverso numeral 35 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Judicial en el Estado; toda vez que se trata del órgano jurisdiccional dentro de cuya adscripción territorial se encuentra ubicado el domicilio del menor, según así se refirió desde el escrito de demanda inicial.

Tercero: La vía ordinaria civil adoptada por la actora se estima correcta, pues el artículo 638 del Código de Procedimientos Civiles en el Estado, dispone claramente, se ventilarán en juicio ordinario toda aquella controversia que no tenga señalada en la codificación adjetiva civil, una tramitación especial, tal y como acontece en el presente caso.

Cuarto: Es pertinente hacer mención, el artículo 952 del Código de Procedimientos Civiles vigente en Nuevo León establece: "Todos los problemas inherentes a la familia se consideran de orden público, por constituir ésta la base de la integración de la sociedad. Tratándose de menores y de obligaciones alimentarias, así como de todos los demás casos del orden familiar, el Juez está obligado a suplir la deficiencia de la queja en los planteamientos de hecho y de derecho y demás aspectos de la demanda y de otras promociones legales y a velar por el interés superior de menores o incapacitados".

Así pues considerando, el negocio de cuenta se recibió en la Oficialía de Partes de este Tribunal el día 2 dos de mayo del año 2023 dos mil veintitrés, y encontrándose relacionado el mismo con los derechos y obligaciones inherentes al orden familiar, entonces, en el dictado de la sentencia del presente juicio, se aplicará el numeral antes referido, supliendo en su caso las deficiencias de hecho o de derecho en el planteamiento, de la demanda y de otras promociones legales; en el entendido, ello únicamente se realizará en caso de que en el procedimiento haya deficiencias incidentes en el contexto de la familia trascendiendo a sus miembros.

Quinto: En este apartado se abordará por esta autoridad, el análisis inherente a la legitimación en la causa (activa y pasiva).

Como cuestión previa, se apunta, la legitimación en la causa o relación jurídica sustancial (activa o pasiva) se refiere a la calidad de las partes en el juicio e implica que la acción debe ser intentada por el titular del derecho y contra la persona obligada por la ley para satisfacerlo; por ello la legitimación activa en la causa implica tener la titularidad del derecho cuestionado en el juicio, y la legitimación pasiva en la causa implica ser el obligado a dar cumplimiento con la prestación reclamada, siendo estos requisitos para que se pronuncie sentencia favorable, sirviendo de apoyo a lo anterior la tesis I.5o.C.87 C de la Novena Época, sostenida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 993 novecientos noventa y tres, del tomo X, Noviembre de 1999 mil novecientos noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dice:

“LEGITIMACIÓN PASIVA. ES UNA CONDICIÓN NECESARIA PARA LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN, NO UN PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO DE ÉSTA Y SU ESTUDIO ES DE OFICIO EN CUALQUIER ETAPA DEL PROCEDIMIENTO.

No son lo mismo los presupuestos para el ejercicio de la acción, que las condiciones para la procedencia de ésta. Los primeros son los requisitos para ejercer la acción y necesarios para la admisión de la demanda y la validez del procedimiento, mientras que las segundas constituyen las condiciones necesarias para el acogimiento de la acción en la sentencia definitiva. Una de esas condiciones es la legitimación en la causa o relación jurídica sustancial (activa o pasiva) que se refiere a la calidad de las partes en el juicio e implica que la acción debe ser intentada por el titular del derecho y contra la persona obligada por la ley para satisfacerlo; esa relación jurídica sustancial, como una de las condiciones para acoger la acción, en principio corresponde al actor acreditarla demostrando su calidad de titular del derecho y la calidad de obligado del demandado; sin embargo, debe analizarla el juzgador aun de oficio e incluso el tribunal de alzada aunque no haya sido tema de la apelación. Por tanto, al determinar la Sala responsable que la demandada en la reconvención carecía de legitimación pasiva para responder por la acción de prescripción positiva, no analizó un presupuesto procesal para el ejercicio de la acción ni un elemento de ésta sino una condición necesaria para su satisfacción en la sentencia y la podía analizar aunque no haya sido tema de apelación, pues no podía pronunciar un fallo declarando procedente la acción que ejerció el demandado en vía de reconvención, si no se llamó a juicio a una parte interesada y la persona a quien se reconvino no es la persona que vincula la ley con relación a la prescripción positiva.”

Criterio el anterior, el cual resulta aplicable al presente caso concreto por analogía de razones.

En ese orden de ideas, en opinión de este órgano jurisdiccional, tanto la parte actora *****, como el demandado ***** se encuentran legitimados (activa y pasivamente) para comparecer al presente litigio, lo anterior es así, en virtud de obrar en autos la certificación del Registro Civil siguiente:

JF010052381504

JF010052381504

**JUICIOS EN ESTADO DE SENTENCIA Y SENTENCIADOS
SE DICTA SENTENCIA DEFINITIVA**

1.- Acta número *****, libro *****, de fecha ***** de ***** de ***** , levantada por el Oficial ***** , ***** , relativa al nacimiento de ***** , de la cual se aprecia como nombre de sus padres, los de ***** y *****.

Documental pública a la cual quien juzga reconoce valor probatorio al tenor de los artículos 239 fracción II, 287 fracción IV, 369 y 370 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, en relación con los diversos numerales 35 y 47 del Código Civil en vigor, justificándose la relación paterno filial existente entre los ahora antagonistas respecto del menor ***** , así como el ejercicio de la patria potestad que le asiste a aquéllos respecto de su descendiente, conforme a lo dispuesto por los artículos 412 y 414 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, por ende, se estima, los mencionados progenitores resultan ser las personas legitimadas para intervenir en el presente Juicio Ordinario Civil sobre Pérdida de la Patria Potestad.

Sexto: Sobre esa base, a continuación se proseguirá con el análisis de la acción de pérdida de la patria potestad deducida por ***** , en contra de ***** , respecto del menor *****

Previamente recuérdese lo acotado por los artículos 223 y 224 del Código Procesal Civil, en relación a que la actora debe probar los hechos constitutivos de su acción y el reo los de sus excepciones, pero sólo cuando la actora pruebe los hechos fundamento de su demanda, el reo está obligado a la contraprueba que demuestre la inexistencia de aquellos, o a probar los hechos que sin excluir el hecho probado por la actora, impidieron o extinguieron sus efectos jurídicos. El que niega sólo está obligado a probar: I.- Cuando su negación no siendo indefinida envuelva la afirmación de un hecho, aunque su negativa sea en apoyo de una demanda o de una excepción. Los jueces en éste caso no exigirán una prueba tan rigurosa como cuando se trate de un hecho positivo, pero sin dejar de observar el artículos 387 del citado cuerpo legal; II.- Cuando desconozca la presunción legal que tenga en su favor el colitigante.

Pues bien, en el caso concreto la accionante ***** , solicita en la vía ordinaria civil, la Pérdida de la Patria Potestad ejercida por el señor ***** , respecto de su menor hijo ***** , fundando su acción en que desde el 25 veinticinco de Julio del año 2019 dos mil diecinueve, fecha en que los contendientes se divorciaron, el demandado dejó de buscar y tener cualquier tipo de contacto con el menor inmerso en la causa, habiendo transcurrido más de 1,362 mil trescientos sesenta y dos días sin que el demandado conviva con el menor ***** , sustentando su acción en la fracción V del artículo 444 del Código Civil del Estado, el cual establece:

La patria potestad se acaba:
(...)

V.- Por abandono del menor durante un plazo de más de ciento ochenta días naturales, aun cuando no se comprometa su salud, seguridad o moralidad.

(...)

Sobre el particular, cabe destacar por esta Autoridad que la patria potestad es un estado jurídico que impone derechos y obligaciones recíprocos entre los padres e hijos, y como tal tiene la cualidad de ser una institución de orden público en la que el estado y la sociedad en general tienen especial interés en que se preserve y se apliquen en debida forma las normas que la rigen; que el ejercicio de la patria potestad entraña consecuencias trascendentales para quienes se encuentran inmersos en esa institución por tener la característica original de ser un vínculo natural correlativo de derechos, deberes, obligaciones y facultades existentes entre los progenitores y descendientes, cuyo origen deriva de relaciones generalmente afectivas, que requiere de una atmósfera necesariamente enriquecida de los valores más justipreciados como son: dignidad, salud, seguridad, integridad, moralidad, protección, cuidado, afecto, armonía, estabilidad, satisfacción de necesidades, guía y dirección adecuadas. En consecuencia, para decretar la pérdida de ese derecho natural reconocido por la ley, se requiere demostrar plena y fehacientemente los hechos y valorar las circunstancias en que se presenta, para determinar si hay razones suficientes que permitan verificar que puedan afectarse los valores apuntados y producirse resultados lesivos para el menor, es decir, se debe probar la conducta o proceder del progenitor incumplido y razonar los motivos por los cuales se estiman afectados los derechos derivados de la institución en comento. Así también, cabe destacar que la intención del legislador al reformar las causales que motiven la pérdida de la patria potestad establecidas en el artículo 444 del Código Civil vigente en el Estado, obedecieron a la necesidad de adecuar a la patente realidad que actualmente atraviesa la sociedad en virtud del deficiente desempeño que observa en los progenitores que incurrir en los supuestos que tal dispositivo estatuye, y en aras de salvaguardar la integridad física, mental, emocional y social del menor sujeto a la patria potestad, con el objeto de lograr su sano desarrollo y su probidad como persona de bien.

De lo cual se infiere, son elementos de procedibilidad y requisitos *sine qua non* para la prosperidad de las acciones invocadas los siguientes, para la causal contenida en la fracción V del artículo 444 del Código Civil en vigor: *I.- El ejercicio de la Patria Potestad por parte del demandado; y II.- El abandono del menor durante un plazo de más de ciento ochenta días naturales, aun cuando no se comprometa su salud, seguridad o moralidad.*

En este punto es pertinente poner de relieve, el Doctor en Derecho *****, ha sostenido "*la patria potestad comprende un conjunto de poderes-deberes impuestos a los ascendientes, que estos se ejercen sobre la persona y bienes de los hijos menores, para cuidar estos, dirigir su educación y procurar su asistencia, en*

JF010052381504

JF010052381504

**JUICIOS EN ESTADO DE SENTENCIA Y SENTENCIADOS
SE DICTA SENTENCIA DEFINITIVA**

*la medida en que su edad y minoridad lo requiere” (Derecho Civil Curso ***** , S.A, México, 1980, pág. 667).*

De ello puede colegirse, el fundamento de la patria potestad recae en la naturaleza humana; la cual confiere a los padres la misión específica de asistir y formar a sus hijos; es una figura jurídica que encierra las más profundas y fundamentales relaciones humanas; las que se dan prioritariamente entre padres e hijos y, por su naturaleza supone todo el cariño, protección, cuidado, guía y respaldo que los niños por su indefensión buscan en sus padres; concluyendo así, lo pretendido con esta figura jurídica, es brindar seguridad, apoyo y guía a los menores descendientes por parte de sus progenitores.

Asentado lo anterior se tiene, la patria potestad se funda en una prerrogativa inminentemente de protección para el menor de edad derivada de su natural indefensión, la cual tiene su origen en un parentesco consanguíneo o civil; por tanto, naturalmente asiste a los padres y abuelos el ejercicio de este derecho.

Luego, como la condena a la pérdida de la patria potestad acarrea graves consecuencias perjudiciales tanto para los hijos como para el ascendiente que la ejerce, solo puede decretarse en casos excepcionales previstos en la ley, para ello se requiere de pruebas plenas e indiscutibles que sin lugar a dudas hagan manifiesta la justificación de tal privación, toda vez que la función de la patria potestad radica en llevar a cabo todo lo necesario para proteger la persona y bienes de los menores de edad, quienes por su condición (menores de edad) no cuentan con la capacidad biológica, psicológica y mental, para el cuidado total de su persona, por ello es que tal facultad se delega de forma natural a sus ascendientes (padres y abuelos) quienes en caso de incumplimiento con la obligación derivada de esta institución, son sancionados con su pérdida, cuando tal inobservancia encuadre en alguna de las causas de pérdida de patria potestad establecidas en el artículo 444 del Código Civil del Estado, y sean demostrados fehacientemente ante la Autoridad Judicial.

A fin de acreditar el presupuesto jurídico necesario para el ejercicio de la acción de pérdida de la patria potestad, cabe recordar, como se observó en el considerando inmediato anterior, donde se analizó la legitimación en la causa de los ahora contendientes, ellos son quienes se encuentran en ejercicio de la patria potestad de la menor afecta a la causa, en mérito de ello, se estima demostrado el primero de los supuestos requeridos para la procedencia de la presente acción, a saber, el ejercicio de la patria potestad por parte del demandado respecto de su menor hijo*****.

Séptimo: En ese panorama, a continuación se procede al estudio del resto de las pruebas de la parte actora:

Confesional por posiciones a cargo de *****, sobre la cual es menester referir que, no obstante de encontrarse debidamente notificado y enterado de los apercibimientos de ley, no compareció al desahogo de la misma; por lo que mediante el desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos respectiva, ésta Autoridad tuvo a bien declararlo confeso de todas aquellas posiciones que fueron calificadas de legales, siendo estas las siguientes:

- 1.- Que desde la fecha 25 veinticinco del mes de julio del año 2019 dos mil diecinueve, dejó de convivir con el menor *****.
- 2.- Que usted representa un riesgo para el sano desarrollo del menor *****.
- 3.- Que su situación jurídica actual representa un riesgo para el sano desarrollo del menor *****.
- 4.- Que usted tiene nulo interés en convivir con el menor *****.

Confesión ficta a la cual esta autoridad judicial le confiere valor y relevancia jurídica plena, de conformidad con los artículos 239 fracción I, 260, 265, 270, 361 y 366 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, y con la cual, el enjuiciado reconoció fictamente que desde la fecha 25 veinticinco del mes de julio del año 2019 dos mil diecinueve, dejó de convivir con el menor *****; que representa un riesgo para el sano desarrollo del mencionado menor; que su situación jurídica actual representa un riesgo para el sano desarrollo del menor ***** y que tiene un nulo interés en convivir con éste.

También fue ofertada la documental en vía de informe solicitada al Director y/o Representante Legal del Centro de Reinserción Social Número 2 (CERESO Apodaca 2), misma que fue rendida mediante los escritos presentados los días 19 diecinueve de enero y 22 veintidós de febrero del año 2024 dos mil veinticuatro, comunicándose en el primero de ellos que en el Centro de Reinsección Social número 1 "Norte" aparecían 2 registros, con la siguiente información:

*****, con fecha de nacimiento *****de *****de ***** , actualmente se encuentra libre; y

*****, con fecha de nacimiento *****de ***** de ***** , actualmente se encuentra presente.

Mientras que, con el segundo curso informo:

Que efectivamente la persona de nombre *****, se encontraba privado de su libertad, en ese Centro de Reinserción Social número 1-Norte, a disposición del Juez de Control y de Juicio Oral Penal en el Estado, con calidad jurídica de imputado dentro de la carpeta judicial *****, por el delito de Contra la Salud en su modalidad de Narcomenudeo, en su variante de Posesión Simple de Marihuana o Canbis, y que el 19 de diciembre de 2023 fue puesto en libertad, en cumplimiento al oficio ***** , emitido por el C.

JF010052381504

JF010052381504

**JUICIOS EN ESTADO DE SENTENCIA Y SENTENCIADOS
SE DICTA SENTENCIA DEFINITIVA**

Juez de Control y de Juicio Oral Penal en el Estado, el cual ordenó la inmediata libertad de imputado ***** , en virtud de habersele concedido el beneficio de la Suspensión Condicional del Proceso, única y exclusivamente por lo que a esta causa y delito se refiere.

Instrumental que en su carácter de privadas se le concede valor probatorio en los términos de los artículos 239, 287 y demás relativos del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, acreditándose que el demandado estuvo imputado dentro de la carpeta judicial ***** , por el delito de Contra la Salud en su modalidad de Narcomenudeo, en su variante de Posesión Simple de Marihuana o Canbis.

De igual forma, se ofreció por la parte actora la testimonial a cargo de *****y *****; sin embargo, en la audiencia de pruebas y alegatos celebrada el día 31 treinta y uno de enero de 2024 dos mil veinticuatro, dicha probanza se declaró desierta, en virtud de que la parte actora fue omisa en presentar a las testigos de su intención.

Asimismo, se ofertó la pericial en evaluación psicológica, la cual fue desechada en el auto dictado el 14 catorce de diciembre del año 2023 dos mil veintitrés, por no haberse dado cumplimiento a lo establecido en el numeral 310 de la Codificación Procesal Civil en comento.

Ahora, en cuanto a la instrumental de actuaciones, una vez analizadas las actuaciones del procedimiento no se advierte que las mismas le produzcan beneficio alguno a la demandante, por lo que éstas resultan infértiles acorde al numeral 287 fracción VIII del Código de Procedimientos Civiles.

Ulteriormente, respecto de la prueba presuncional acorde a las actuaciones judiciales que componen el expediente, se llega a la conclusión de que de las mismas no se advierte alguna que le beneficie a la accionante en los términos de los artículos 355, 356 y 359 del Código adjetivo de la materia, motivo por el cual resulta infértil dicho elemento de prueba para los intereses de la parte accionante.

Hasta aquí, las probanzas ofrecidas por la parte actora, por lo que, antes de hacer declaratoria alguna sobre la procedencia de éste juicio, veamos la conducta procesal de la parte demandada.

Octavo: Antes de realizar declaratoria alguna en cuanto al procedimiento que se resuelve, cabe destacar que el demandado no compareció ante esta autoridad a dar contestación a la demanda interpuesta en su contra ni ofreció elemento de prueba alguno que pudiera desvirtuar lo acreditado por la parte actora.

Noveno: Por otro lado, cabe señalar que en autos fue respetado el derecho del menor inmerso en esta causa, a emitir su opinión dentro del expediente que nos ocupa, en términos del artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, esto

ocurrió a través de la diligencia de fecha 27 veintisiete de junio de 2024 dos mil veinticuatro, de forma video-grabada, con la cual se robustece el abandono a que se hace referencia en la causal de pérdida de patria potestad reclamada y acreditada en el caso concreto, considerando lo expresado por el menor, quien refirió lo siguiente:

“Que va en ***** grado, que en su salón tiene maestra, que ella es la que pone orden en su salón, que le dicen ***** , que va bien en sus calificaciones, que saca 8 y 9, que su materia favorita es inglés, pero que le gustan todas, que los jueves tiene artes y deportes, que en su casa hace algunos inventos, como un ***** , que de grande quiere ser científico, que no juega videojuegos, que vive con su mamá, que tiene un hermano de ***** años, que está en la secundaria, que se lleva bien con su hermano, que no se pelean, que se lleva bien con su mamá, que la quiere mucho, que conoce a ***** , que es su papá que si lo ha visto, que es una triste historia, que hubo una situación de su mamá y su papá, pero que vio que él los abandonó hace mucho, cuando él estaba en otro grado escolar, que si le ha hablado su papá, que no tiene celular, que le marca al teléfono de su mamá, que si le gustaría verlo, pero que él se casó con otra mujer, que si tiene abuelitos y tíos por parte de él, que si los ha visto más seguido y que si le gusta verlos a su familia paterna, que si tiene mascotas, muchos gatos que tiene afuera porque son callejeros, que a veces los gatos rasguñan los muebles; que es muy observador, que de la ciencia le gustaría mezclar para hacer explosiones, pero que todavía no le dan esa clase, que le gusta hacer mucho manualidades, que algo que no le gusta hacer es ir a la escuela, que a veces se enferma, que cuando se enferma le dice a su mamá, que cuando va al doctor, su mamá lo lleva, que no le gustan las inyecciones, y que solo va su mamá, que el señor ***** no lo ha acompañado, y que no le habla por teléfono ni a visitar; que no practica ningún deporte, que le gusta el estudio”.

De igual forma, obra la opinión emitida por el Agente del Ministerio Público adscrita a este Juzgado, señaló, lo que sigue:

“Que una vez analizadas las constancias que integran el presente procedimiento, ésta Representación Social es de opinión que al momento de resolver en definitiva la presente causa, lo haga tomando en consideración todas y cada una de las actuaciones que la integran en cuanto beneficien a el menor, motivo de la presente causa y primordialmente en base al Interés Superior de el mismo de conformidad a lo establecido en el Artículo 952 del Código de Procedimientos Civiles en relación con los numerales 1, 5, 6, 7, 8, 13 fracción I, 41, 42, 45, 82, 83, 84, 85, y 101 de la Ley de protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado, así como en los arábigos 23 Bis, 30, 30 Bis, 30 Bis I y 30 Bis III del Código Civil vigente así como en lo establecido en lo dispuesto en los artículos 4 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 2.2., 3.2 y 12.2 de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Debiéndose dictar una sentencia apegada a derecho y una vez reunidos los requisitos de legalidad aplicados al caso en particular.”

JF010052381504

JF010052381504

**JUICIOS EN ESTADO DE SENTENCIA Y SENTENCIADOS
SE DICTA SENTENCIA DEFINITIVA**

Mientras que, el **Licenciado *******, tutor designado del referido menor, señaló lo que sigue:

“Que es opinión del suscrito el que, se resuelva conforme a derecho salvaguardando los intereses superior del niño, así como los derechos de los menores, y las garantías individuales consagradas en nuestro pacto Federal, de igual forma, tomando en base las actuaciones del presente procedimiento así como la apatía del demandado (a) al comparecer al presente procedimiento a manifestar lo que a sus derechos conviniera, por lo tanto se opina con carácter ostentando se declaren procedentes las pretensiones de la parte actora, esencialmente lo atinente a la solicitud de la pérdida de la patria potestad, señalada en los puntos petitorios del escrito prístino de demanda, que reclama de su antagonista siendo tal el demandado (a), toda vez que como se visualiza del sumario en que se comparece se hace latente el abandono en que incurre el demandado (a), en relación con sus menor (es) hijo (s), esto es así y que resulta concordante con los datos de prueba aportados por la actora, se deriva benéfico se decrete la pérdida de la patria potestad y custodia, aunado a la actitud y actividad procesal pasiva mostrada por la parte reo dentro del presente juicio ordinario civil, solicitando sea siempre observado que no se vean afectados los derechos e intereses del (los) menor (es) procreado (s), velando siempre que se salvaguarden el interés superior del niño y así como los derechos de los niños y de la misma forma sus garantías individuales. Lo anterior con fundamento en lo establecido en el artículo 952, 905 fracción II del Código de Procedimientos Civiles en relación con los numerales 1, 5, 6, 7, 8, 13 fracción I, 41, 42, 45, 82, 83, 84, 85 y 101 de la Ley de Protección de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes en el Estado, así como en los arábigos 23 Bis, 30, 30 Bis I y 30 Bis III del Código Civil vigente en la entidad, así como lo establecido en lo dispuesto en los artículos 4 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 2.2, 3.2 y 12.2 de la Convención Internacional sobre los derechos de los niños..”

Décimo: En ese panorama, es inminente realizar el razonamiento lógico-jurídico relativo a la procedencia o improcedencia de la presente acción.

En ese sentido, en el caso de la causal contenida en la fracción V del mencionado numeral 444 del Código Civil del Estado, la cual establece:

(...) V.- Por abandono del menor durante un plazo de más de ciento ochenta días naturales, aun cuando no se comprometa su salud, seguridad o moralidad. (...)

Cuyos elementos de procedibilidad son:

- I.- El ejercicio de la Patria Potestad por parte del demandado;*
- y.*
- II.- El abandono del menor durante un plazo de más de ciento ochenta días naturales, aun cuando no se comprometa su salud, seguridad o moralidad.*

Ambos elementos fueron acreditados en el caso concreto, con la certificación del registro civil relativa al nacimiento del menor, en el caso del primer elemento, y en el caso del segundo, con la confesional ficta del demandado y el informe rendido por el Director y/o Representante Legal del Centro de Reinserción Social Número 2 (CERESO Apodaca 2). Con lo que ha quedado de manifiesto el incumplimiento de sus deberes paternales, por más de 180 ciento ochenta días naturales, pues aún y cuando no se ponga en riesgo su integridad, la lejanía del demandado respecto de su hijo, pone de manifiesto una desatención hacia su persona, lo cual no fue desvirtuado por el demandado, ni haber demostrado tener una causa justificada para incumplir con la obligación que natural y legal le corresponde de proporcionar; manteniendo un contacto consistente con el menor, a efecto de brindarle su cariño, protección, cuidado, guía, desplegar una conducta que le sea de ejemplo para su sano desarrollo; a efecto de estar al pendiente de su edad y desarrollo, dejando de lado totalmente el efectivo cumplimiento de su rol paternal por más de 180 ciento ochenta días naturales, conducta la cual contraria a la finalidad de prevención y conservación de la integridad física y moral del hijo, inmersa en la figura de la patria potestad, lo cual evidentemente repercute en un menoscabo al desarrollo integral del menor afecto a la causa.

Frente a ello, esta Autoridad estima comprobada en el presente caso las causales de pérdida de la patria potestad contemplada en la fracción V del artículo 444 de la Ley Sustantiva Civil, sirven de apoyo además de la norma citada, las tesis aisladas que a la letra dicen:-

PATRIA POTESTAD. EL INCUMPLIMIENTO DEL PROGENITOR DE SUS DEBERES FRENTE A SUS HIJOS, PUEDE ACREDITARSE MEDIANTE LA PRUEBA PRESUNCIONAL HUMANA, PARA EFECTOS DE LA PÉRDIDA DE AQUÉLLA. El artículo 628, fracción III, del Código Civil para el Estado de Puebla dispone que los derechos de la patria potestad se pierden cuando quien o quienes la ejercen realicen, entre otros supuestos, cualquier acto que "implique el abandono de sus deberes frente a sus hijos o nietos, en su caso, de manera tal que se pueda comprometer la vida, la salud, la seguridad, el desarrollo moral del menor, o incluso su integridad física o psíquica". Por su parte, los artículos 315 y 317 del Código de Procedimientos Civiles del Estado regulan lo relativo a la prueba presuncional humana, que se presenta "cuando de un hecho debidamente probado, se deduce otro que es consecuencia lógica de aquél". Así las cosas, cuando en el juicio respectivo se acredita debidamente el incumplimiento del progenitor demandado de sus deberes frente a sus hijos, en lo relativo a procurar la convivencia y proporcionar los alimentos necesarios para su subsistencia, sin causa justificada, ello trae como consecuencia lógica la posibilidad de que se afecte su salud mental y física, puesto que no es normal que un padre, intencionalmente, se desatienda de sus hijos y les niegue lo indispensable para su subsistencia, amén de que tal falta de ministración de lo mínimo necesario para tal efecto, también puede afectar la salud física del menor, quien no sólo requiere de comida y vestido, sino también de atención médica cuando sufra alguna enfermedad o accidente, y si tales cuidados no son proporcionados, es indiscutible que la

JF010052381504

JF010052381504

**JUICIOS EN ESTADO DE SENTENCIA Y SENTENCIADOS
SE DICTA SENTENCIA DEFINITIVA**

posibilidad de que se habla se encuentra latente; consecuentemente, el incumplimiento del progenitor de sus deberes frente a sus hijos, es posible acreditarlo mediante la prueba presuncional humana, para que proceda la pérdida de la patria potestad. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo directo 364/2008. 23 de diciembre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Rosa María Temblador Vidrio. Secretario: Ciro Carrera Santiago. Novena Época Registro: 167225 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXIX, Mayo de 2009 Materia(s): Civil Tesis: VI.1o.C.117 C Página: 1087.-

----- PATRIA POTESTAD. EL ABANDONO DE MENORES DURANTE MÁS DE CIENTO OCHENTA DÍAS NATURALES COMO CAUSAL PARA PERDERLA SE ACTUALIZA ANTE EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE UNO DE LOS PROGENITORES DE LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, AUN CUANDO QUEDEN BAJO EL CUIDADO DEL OTRO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN).

Por definición legislativa, el abandono de menores no implica los alcances que lingüísticamente pudieran corresponder, pues el artículo 65 del Código Civil del Estado conceptúa dicha hipótesis en virtud de que sin causa justificada se desatiendan o incumplan las obligaciones a que legalmente están compelidas las personas que ejercen, entre otras, la patria potestad; mientras que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, tal evento ocurre cuando a la persona se le deja en circunstancias que no le permitan proveer a su propio cuidado y con peligro de su integridad, es decir, en desamparo absoluto o simplemente a su suerte. En este sentido, la causal de pérdida de la patria potestad prevista en el artículo 444, fracción V, del ordenamiento invocado, originada por el abandono del menor durante más de ciento ochenta días naturales se actualiza cuando, ante el incumplimiento por parte de uno de los progenitores, el menor queda bajo el cuidado del otro, pues aun cuando no se aprecia el desamparo absoluto - precisamente porque el menor es cuidado por uno de los padres-, lo cierto es que el legislador limitó la hipótesis de que se trata a la indolencia del padre abandonante de las obligaciones que le corresponden en el ejercicio de la patria potestad, en virtud de la conducta de éste y no de la que asuma el otro progenitor. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL CUARTO CIRCUITO. Amparo directo 18/2006. 15 de junio de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: *****. Secretario: *****. Amparo directo 158/2006. 15 de junio de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: *****. Secretario: *****. Amparo directo 125/2006. 29 de junio de 2006. Unanimidad de votos. Ponente *****. Secretario: *****. Amparo directo 279/2006. 22 de septiembre de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: *****. Secretario: *****. Novena Época Registro: 173230 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXV, Febrero de 2007 Materia(s): Civil Tesis: IV.1o.C.72 C Página: 1841.-----

Además, es preciso indicar en este punto, la patria potestad tiene su fundamento en la naturaleza humana, confiriendo a los padres la misión específica de asistir y formar a sus hijos, deber natural que la ley protege a favor de los menores de edad, pues así como de forma natural se requiere la presencia de ambos padres

para lograr la creación de un nuevo ser humano, la ley también reconoce la participación de ambos progenitores para dar debida educación, atención, cuidado, guía, crecimiento y desarrollo integral a los hijos, velando por su persona y sus bienes, ejerciendo también un derecho de representación respecto de ellos; tal y como se advierte del contenido de los artículos 414, 420, 421, 422, 423, 424 y 425 del Código Civil del Estado en vigor.

En igual guisa es preciso atender, el ejercicio de la patria potestad implica; ambos progenitores, más allá de su vínculo nupcial o emocional (imperante entre ellos), tienen el deber de asistir a su hijo durante su minoría de edad, asistencia que implica su presencia constante para ser su guía en las diversas situaciones adversas de la vida; brindar la atención, cuidados y protección necesarias a efecto de otorgarles un crecimiento y desarrollo integral óptimo que en el futuro les permita convertirse en adultos responsables y de bien; desde luego, la presencia de ambos progenitores es indispensable también para primariamente, satisfacer sus requerimientos de vida imprescindibles para lograr un crecimiento sano e integral, esto es, ambos padres, en la medida de sus posibilidades, deben cumplir con sus deberes como tales, siendo primordial el de atender puntual y completamente las necesidades alimentarias de sus hijos, pues este incide directamente en la subsistencia de la integridad física y moral de los hijos.

Por todo lo anterior, y con el actuar y comportamiento del demandado, se considera, éste faltó al deber fundamental de velar y proteger a su menor hijo, que es la primordial obligación derivada del sano ejercicio de la patria potestad, violentando gravemente el derecho de todo menor de edad consignado en los artículos 3 apartado a), 7, 11 apartado a), 19 y 21 apartado a) de la Ley Federal para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; así como los numerales 5 fracción I, 20 y 21 de la Ley de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Nuevo León, atinentes a que el interés superior de los menores de edad, es la norma rectora de cualquier determinación a pronunciar que afecte su esfera jurídica; además de poner de manifiesto las obligaciones parentales en cuanto a otorgar una vida digna a los descendientes menores de edad, la cual deberá garantizar el pleno y armónico desarrollo de la personalidad del individuo en el seno de la familia.

Décimo Primero: Por todo lo anterior, en virtud de los hechos expuestos, de las pruebas aportadas al presente juicio, y el resultado de ellos obtenido, se concluye la materialización del supuesto normativo previsto en la fracción V del arábigo 444 del Código Civil, sin que se desprenda deficiencia en los planteamientos de hecho sobre la que se tenga que realizar suplencia alguna como lo impone el artículo 952 del Código de Procedimientos Civiles.

Décimo Segundo: En esa consonancia de ideas, se declara procedente el **JUICIO ORDINARIO CIVIL SOBRE**

JF010052381504

JF010052381504

**JUICIOS EN ESTADO DE SENTENCIA Y SENTENCIADOS
SE DICTA SENTENCIA DEFINITIVA**

PÉRDIDA DE LA PATRIA POTESTAD, promovido por ***** , en contra de ***** , con base en la fracción V del artículo 444 del Código Civil vigente en el Estado; sin embargo, quedan subsistentes para la parte demandada las obligaciones conducentes para con su menor hijo *****, de acuerdo con lo establecido por el artículo 285 de la codificación en consulta.

Décimo Tercero: Al efecto, atento a lo señalado en el artículo 444 fracción V del código civil vigente en el Estado, así como a los razonamientos esbozados en el considerando que antecede, se condena al señor ***** en su calidad de padre del menor ***** , a perder el derecho a ejercer la patria potestad sobre éste, por haber dado causa para ello conforme a lo considerado en puntos que anteceden, y por ende la custodia del mismo, debiendo continuar la madre, aquí parte actora, con la guarda y custodia de su menor hijo.

Décimo Cuarto: Ahora bien, en aras de salvaguardar la integridad física, mental, emocional y social del menor ***** , con el objeto de lograr su sano desarrollo; esta Autoridad deja a salvo los derechos del citado menor por si desea hacer uso del derecho de convivencia con su progenitor, toda vez que el derecho de convivencia no es exclusivamente de los padres, sino también de los hijos. Teniendo apoyo lo anterior en el siguiente criterio jurisprudencial:

Novena Época. Registro 165495. Instancia: Primera Sala. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXI, Enero de 2010, Materia: Civil. Tesis 1ª./j. 97/2009. Página 176. **PATRIA POTESTAD. SU PÉRDIDA NO CONLLEVA INDEFECTIBLEMENTE IMPEDIR QUE EL MENOR EJERZA EL DERECHO DE CONVIVENCIA CON SUS PROGENITORES.**-----

Una de las consecuencias de la pérdida de la patria potestad es que el progenitor condenado no tenga derechos respecto de sus hijos, es decir, la privación de todo privilegio relativo a exigir la obediencia y el respeto de los menores, la facultad de llevar su representación legal, la administración de sus bienes y decidir, participar y opinar sobre asuntos inherentes a su educación, conservación, asistencia, formación y demás relativos a los aspectos no patrimoniales de quien ejerce la patria potestad. Sin embargo, independientemente de las consecuencias apuntadas - que se relacionan directamente con los derechos que otorga al progenitor el ejercicio de la patria potestad-, de ello no se aprecia que su pérdida conlleve indefectiblemente que deba impedirse al menor ejercer el derecho de convivencia con sus progenitores en tanto que, por un lado, ese derecho no es exclusivo de los padres, sino también de los hijos y, por el otro, no todas las causales de pérdida de la patria potestad son de la misma gravedad. En ese orden de ideas resulta indispensable atender al interés superior del menor, para lo cual deben propiciarse las condiciones que le permitan un adecuado desarrollo psicológico y emocional, que en la mayoría de los casos implica la convivencia con ambos progenitores, independientemente de que ejerzan o no la patria potestad sobre aquél; de ahí que el juez de lo familiar habrá de atender a la gravedad de la causal que originó la pérdida de la patria potestad para determinar si la convivencia pudiera importar

algún riesgo para la seguridad o desarrollo adecuado del menor, en el entendido de que si determina dicha pérdida pero no del derecho de convivencia, ello obedecerá a que subsiste el derecho del menor a obtener un desarrollo psico-emocional adecuado y a que las condiciones particulares así lo permiten, mas no porque el progenitor condenado pueda exigir el derecho de convivencia. Contradicción de tesis 123/2009. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito. 9 de septiembre de 2009. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: *****. Ponente: *****. Secretaria: *****. Tesis de jurisprudencia 97/2009. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha veintitrés de septiembre de dos mil nueve.

Décimo Quinto: Se procede por parte de esta autoridad a entrar al estudio del concepto relativo a los gastos y costas que se hayan originado con motivo de la tramitación del presente juicio.

En ese sentido, se tiene que el artículo 90 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo León, dispone que en toda sentencia definitiva o interlocutoria dictada en asuntos de carácter contencioso, se hará forzosamente condenación en costas, determinando cuál de las partes debe pagar a la parte contraria las costas que se le hayan causado en el juicio.

Por su parte, el diverso numeral 91 del ordenamiento en cita, establece que el litigante que no obtenga resolución favorable sobre ninguno de los puntos de su demanda y el que fuere condenado en absoluta conformidad con la reclamación formulada en su contra.

Sin embargo, este Tribunal considera que no se actualizan en el presente caso las hipótesis previstas en los artículos 90 y 91 del Código de Procedimientos Civiles de la Entidad, en atención a la jurisprudencia que versa sobre la improcedencia de la condena al pago de gastos y costas en los juicios o procedimientos relacionados con el derecho familiar, la cual se transcribe a continuación:

GASTOS Y COSTAS. ES IMPROCEDENTE LA CONDENA A SU PAGO EN LOS JUICIOS O PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON EL DERECHO FAMILIAR, E IGUALMENTE, CON EL DE MENORES DE EDAD O INCAPACES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ).¹

El artículo 104 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz prevé la condena al pago de gastos y costas con base en la teoría del vencimiento, al establecer que siempre será condenado el litigante que no obtuviere resolución favorable, ya en lo principal, ya en los incidentes que surgieren. Sin embargo, acorde con la reforma a su primer párrafo, última parte, aprobada por decreto publicado en la Gaceta Legislativa de 8 de enero de 2015, esa condena no operará y, por tanto, es improcedente en

¹ Época: Décima, Registro: 2012948 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Octubre de 2016 Materia(s): Civil Tesis: PC.VII.C. J/5 C Página: 1825.

JF010052381504

JF010052381504

**JUICIOS EN ESTADO DE SENTENCIA Y SENTENCIADOS
SE DICTA SENTENCIA DEFINITIVA**

los juicios o procedimientos relacionados con el derecho familiar, y con el de menores de edad o incapaces.-----

Criterio anterior el cual por analogía se considera aplicable al caso en estudio, pues el presente asunto es concerniente a derecho de familia.

Por lo que no se hace condenación alguna por el concepto de gastos y costas ocasionados por el trámite de este juicio.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, es de resolverse y se resuelve:

Primero: Se declara, la parte actora demostró los hechos constitutivos de su acción de pérdida de patria potestad a que hace referencia la fracción V del numeral 444 del Código Civil vigente en la Entidad, y que la parte demandada no dio contestación, ni ofreció pruebas; en consecuencia:

Segundo: En virtud de los anteriores razonamientos expuestos con antelación, se decreta la procedencia del presente juicio ordinario civil sobre pérdida de la patria potestad respecto del menor*****promovido por ***** , en contra de ***** , procedimiento que se tramitara ante este Juzgado dentro del expediente judicial ***** .

Tercero: Se condena al señor ***** , a la pérdida del derecho a ejercer la patria potestad sobre el menor ***** , y por ende a la pérdida de la custodia del mismo, debiendo continuar la madre, aquí parte actora, con la guarda y custodia de su menor hijo en comento.

Cuarto: Se declaran subsistentes para el señor ***** , las obligaciones legales (derivadas de la filiación) que tiene para con su menor hijo ***** .

Quinto: Se condena al señor ***** , en su calidad de padre del menor ***** , a perder el derecho a ejercer la patria potestad sobre éste, por haber dado causa para ello conforme a lo considerado en puntos que anteceden, y por ende la custodia del mismo, debiendo continuar la madre, aquí parte actora, con la guarda y custodia de su menor hijo.

Sexto: En aras de salvaguardar la integridad física, mental, emocional y social del referido infante ***** , con el objeto de lograr su sano desarrollo; esta Autoridad deja a salvo los derechos del citado menor por si desea hacer uso del derecho de convivencia con su progenitor, toda vez que el derecho de convivencia no es exclusivamente de los padres, sino también de los hijos.

Séptimo: En virtud, de los razonamientos efectuados en el último considerando, no se hace condenación alguna por el concepto de gastos y costas erogados por el trámite de este juicio.

Octavo: Notifíquese personalmente. Así, definitivamente lo resuelve y firma la licenciada María Estrella Guadalupe Rodríguez Tamez, Juez Primero de lo Familiar del Primer Distrito Judicial del Estado, actuando ante la presencia del licenciado Miguel Ángel Robles Rodríguez, Secretario que autoriza. Doy fe.

La resolución que antecede se publicó en el Boletín Judicial número 8803 del día 3 tres del mes de abril del año 2025 dos mil veinticuatro, lo que se hace constar para los efectos del artículo 76 de la Ley Procesal Civil en vigor. Doy Fe.

Licenciado Miguel Ángel Robles Rodríguez
Secretario

L'MARR/L'JGRR

Este documento constituye una versión pública de su original. En consecuencia, se suprimió toda aquella información considerada legalmente como confidencial, en virtud de encuadrar en los supuestos normativos previstos en el artículo 3 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y en los artículos 3 y 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León.